Laboral

Nuevo régimen de cotización para trabajadores autónomos

Una reciente normativa introduce, con efectos a partir del 1 de enero del próximo año, un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos. Basado en los ingresos reales, el sistema establece una tabla general y una tabla reducida —para quienes ingresen una cuantía inferior al salario mínimo interprofesional— de bases de cotización con bases mínimas y máximas mensuales. La norma mejora la protección por cese de actividad y otras prestaciones y establece nuevas bonificaciones y reducción de cuotas.

LOURDES LÓPEZ CUMBRE

Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Cantabria
Consejera académica de Gómez-Acebo & Pombo

Aunque el Real Decreto Ley 13/2022, de 26 de julio (BOE de 27 de julio), por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad, entrará en vigor el día 1 de enero del 2023, conviene conocer las claves más importantes de esta nueva regulación —modificada por el Real Decreto Ley 14/2022, de 1 de agosto (BOE de 2 de agosto) y posteriormente convalidada— para prever los cambios que genera el nuevo sistema de cotización en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA). Se

estructura, a continuación, la selección de algunas de ellas.

1. Ingresos reales como base de cotización

a) Principales reglas de cotización

Las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas incluidas en el régimen especial cotizarán en función de los rendimientos anuales obtenidos en el ejercicio de sus actividades económicas, empresariales o profesionales y de conformidad con las reglas

establecidas en el artículo 308 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS). A efectos de determinar la base de cotización en este régimen especial, se tendrán en cuenta la totalidad de los rendimientos netos obtenidos durante cada año natural, por sus distintas actividades profesionales o económicas, aunque el desempeño de algunas de ellas no determine su inclusión en el sistema de la Seguridad Social y con independencia de que las realicen a título individual o como socios o integrantes de cualquier tipo de entidad, con o sin personalidad jurídica, siempre y cuando no deban figurar por ellas en alta como trabajadores por cuenta ajena o asimilados a éstos.

En este sentido, la Ley de Presupuestos Generales del Estado establecerá anualmente una tabla general y otra reducida —prevista para quienes ingresen una cuantía inferior al salario mínimo interprofesional— de bases de cotización para este régimen especial (la disposición transitoria primera del Real Decreto Ley 13/2022 incluye una tabla con las cuantías previstas de forma transitoria entre los años 2023 y 2025; las cuantías de las distintas bases de cotización oscilan entre 751,63 euros —la más reducida— y 4139,40 euros —la de mayor cuantía—). Ambas tablas se dividirán en tramos consecutivos de importes de rendimientos netos mensuales. A cada uno de dichos tramos de rendimientos netos se le asignará una base de cotización mínima mensual y una base de cotización máxima mensual.

Las reglas de cotización serán las siguientes:

a) La base de cotización para todas las contingencias y situaciones

amparadas por la acción protectora se determinará durante cada año natural para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, principalmente, conforme a las siguientes reglas:

- 1.^a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas deberán elegir la base de cotización mensual que corresponda en función de su previsión del promedio mensual de sus rendimientos netos anuales dentro de la tabla general de bases fijada en la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado;
- 2.^a cuando prevean que el promedio mensual de sus rendimientos netos anuales puede quedar por debajo del importe de aquellos que determinen la base mínima del tramo 1 de la tabla general, deberán elegir una base de cotización mensual inferior a aquélla dentro de la tabla reducida de bases que se determinará al efecto anualmente;
- 3.^a deberán cambiar su base de cotización en los términos que se determinen reglamentariamente a fin de ajustar su cotización anual a las previsiones que vayan teniendo de sus rendimientos netos anuales;
- 4.^a los familiares no podrán elegir una base de cotización mensual inferior a aquella que se determine como base de cotización mínima para

contingencias comunes para los trabajadores incluidos en el régimen general de la Seguridad Social del grupo de cotización 7;

5.^a en los supuestos de alta de oficio en este régimen especial, la base de cotización mensual será la base mínima del tramo 1 de la tabla general, salvo que se fije expresamente otra base superior;

6.^a las bases de cotización mensuales elegidas dentro de cada año tendrán carácter provisional hasta que se proceda a su regularización.

b) La cotización mensual en este régimen especial se obtendrá mediante la aplicación de los tipos de cotización que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca cada año para financiar las contingencias comunes y profesionales de la Seguridad Social, la protección por cese de actividad y la formación profesional de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas. La falta de ingreso de la cotización dentro de plazo reglamentario determinará su reclamación junto con los recargos e intereses que correspondan.

b) *Reglas sobre regularización*

La regularización de la cotización, a efectos de determinar las bases de cotización y las cuotas mensuales definitivas del correspondiente año, se efectuará en función de los rendimientos anuales una vez obtenidos y comunicados

telemáticamente por la correspondiente Administración tributaria a partir del año siguiente.

Este procedimiento exige, asimismo, la aplicación de una serie de reglas, entre otras, las que siguen:

1.^a el rendimiento computable de cada una de las actividades ejercidas por la persona trabajadora por cuenta propia o autónoma se calculará de acuerdo con lo previsto en las normas del impuesto sobre la renta de las personas físicas para el cálculo del rendimiento neto y según se determine por el método de estimación directa, de estimación objetiva o en atribución de rentas;

2.^a a los rendimientos indicados se les aplicará una deducción por gastos genéricos del 7 %, salvo en determinados supuestos (consejeros, administradores o socios laborales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 305.2b y e de la Ley General de la Seguridad Social, respectivamente), a los que se aplicará la deducción del 3 % siempre que hubieran figurado noventa días en alta;

3.^a una vez fijado el importe de los rendimientos, se distribuirá proporcionalmente en el periodo que se vaya a regularizar, con las bases definitivas, y se regularizará la cotización provisional mensual efectuada en el año anterior en los términos que se establezcan reglamentariamente, siempre y cuando su base de cotización definitiva no esté comprendida entre la base de cotización mínima y la máxima correspondiente al tramo en el

que estén comprendidos sus rendimientos;

- 4.^a si la cotización provisional efectuada fuese inferior a la cuota correspondiente a la base mínima de cotización anterior, deberán ingresar la diferencia entre ambas cotizaciones hasta el último día del mes siguiente a aquel en que se les notifique el resultado de la regularización, sin aplicación de interés de demora ni recargo alguno de abonarse en ese plazo. Si fuese superior, la Tesorería General de la Seguridad Social devolverá de oficio la diferencia entre ambas cotizaciones, sin aplicación de interés alguno, antes del 31 de mayo del ejercicio siguiente;
- 5.^a la base de cotización definitiva en caso de no presentar declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas o de que, habiéndola presentado, no se hayan declarado ingresos a efectos de la determinación de los rendimientos netos cuando resulte de aplicación el régimen de estimación directa será la base mínima de cotización para contingencias comunes para los trabajadores incluidos en el régimen general de la Seguridad Social del grupo de cotización 7;
- 6.^a en caso de que la correspondiente Administración tributaria efectúe modificaciones posteriores en los importes de los rendimientos anuales, el trabajador podrá, en su caso, solicitar la devolución de lo ingresado indebidamente;
- 7.^a en ningún caso se modificará el importe de las prestaciones de la

Seguridad Social causadas, cuya cuantía será, por tanto, definitiva (art. 309 LGSS);

- 8.^a se establecen normas especiales para los supuestos de cotización reducida y de cotización para trabajadores con sesenta y cinco o más años de edad (art. 320 LGSS), entre otros supuestos especiales.

c) *Sobre la información de los datos necesarios para la cotización*

En cada ejercicio anual, los organismos competentes facilitarán a las entidades gestoras de la Seguridad Social responsables de la gestión de las prestaciones económicas, y a petición de éstas, los datos relativos a los niveles de renta, patrimonio y demás ingresos o situaciones de los titulares de prestaciones en cuanto determinen el derecho a ellas, así como de los beneficiarios, cónyuges y otros miembros de las unidades familiares, siempre que deban tenerse en cuenta para el reconocimiento, mantenimiento o cuantía de dichas prestaciones a fin de verificar si aquéllos cumplen en todo momento las condiciones necesarias para la percepción de las prestaciones y en la cuantía legalmente establecida, ex artículo 71 de la Ley General de la Seguridad Social.

Asimismo, facilitarán a las entidades gestoras de la Seguridad Social que gestionen ayudas o subvenciones públicas la información sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como los datos relativos a las inhabilitaciones para obtener este tipo de ayudas o subvenciones y a la concesión de éstas que deban tenerse en cuenta para el reconocimiento del derecho o para el

importe de las ayudas o subvenciones que se vayan a conceder. Igualmente, deberán facilitar a la Tesorería General de la Seguridad Social, mediante los procedimientos telemáticos y automatizados que se establezcan, toda la información de carácter tributario necesaria para la regularización de cuotas.

d) *Cotización en supuestos de compatibilidad y de pluriactividad*

De acuerdo con el artículo 310 de la Ley General de la Seguridad Social, durante la realización de un trabajo por cuenta propia compatible con la pensión de jubilación, se cotizará únicamente por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, si bien los trabajadores quedarán sujetos a una cotización especial de solidaridad del 9 % sobre su base de cotización por contingencias comunes, no computable a efectos de prestaciones. Tal porcentaje será aplicable a quienes compatibilicen la pensión con una actividad económica o profesional por cuenta propia estando incluidos en una mutualidad alternativa al citado régimen especial.

Por lo demás, aquellas personas que, en razón de un trabajo por cuenta ajena desarrollado simultáneamente, coticen en régimen de pluriactividad, teniendo en cuenta tanto las cotizaciones efectuadas en este régimen especial como las aportaciones empresariales y las correspondientes al trabajador en el régimen de la Seguridad Social que corresponda por su actividad por cuenta ajena, tendrán derecho al reintegro del 50 % del exceso en que sus cotizaciones por contingencias comunes superen la cuantía que se establezca a tal efecto por la Ley de Presupuestos

Generales del Estado para cada ejercicio, con el tope del 50 % de las cuotas ingresadas en este régimen especial en razón de su cotización por las contingencias comunes, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 313 de la Ley General de la Seguridad Social.

2. **Modificación en relación con las prestaciones**

a) *Prestación por cese de actividad*

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 327 y siguientes de la Ley General de la Seguridad Social, la protección por cese de actividad pasa a ser obligatoria y tendrá por objeto dispensar una prestación ante la situación de cese de la actividad que originó el alta en el régimen especial, no obstante poder y querer ejercer una actividad económica o profesional a título lucrativo. El cese de actividad podrá ser definitivo o temporal. El cese temporal podrá ser total —que comportará la interrupción de todas las actividades que puedan originar el alta en el régimen especial— o parcial —cuando se produzca una reducción de la actividad en los términos previstos por esta norma—. El sistema comprende, como es sabido, la prestación económica y el abono de la cotización a la Seguridad Social del trabajador autónomo al régimen correspondiente. Asimismo, para su reconocimiento se exigirá afiliación y alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, tener cubierto el periodo mínimo de cotización por cese de actividad de doce meses, encontrarse en situación legal de cese de actividad, suscribir un compromiso de actividad y acreditar disponibilidad activa para la reincorporación al mercado de trabajo, no haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho

a la pensión contributiva de jubilación y hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

Con todo, uno de los aspectos más importantes de esta prestación se encuentra en la modificación del artículo 331.1a y b de la Ley General de la Seguridad Social:

- En virtud del artículo 331.1a, se considera situación legal de cese la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional. En caso de establecimiento abierto al público, se exigirá su cierre durante la percepción del subsidio, o bien su transmisión a terceros. Se entenderá que existen motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos cuando concurra alguna de las circunstancias ya conocidas; así: 1) pérdidas derivadas del desarrollo de la actividad en un año completo superiores al 10 % de los ingresos obtenidos en el mismo periodo, excluido el primer año de inicio de la actividad; 2) ejecuciones judiciales o administrativas tendentes al cobro de las deudas reconocidas por los órganos ejecutivos que comporten al menos el 30 % de los ingresos del ejercicio económico inmediatamente anterior, o 3) la declaración judicial de concurso que impida continuar con la actividad en los términos de la Ley Concursal.

Pero ahora se añade también la reducción del 60 % de la jornada de la totalidad de las personas en situación de alta con obligación de cotizar de la empresa o la suspensión

temporal de los contratos de trabajo de al menos el 60 % de las personas en situación de alta con obligación de cotizar de la empresa siempre que en los dos trimestres fiscales previos a la solicitud presentados ante la Administración tributaria el nivel de ingresos ordinarios o ventas haya experimentado una reducción del 75 % de los registrados en los mismos periodos del ejercicio o ejercicios anteriores y los rendimientos netos mensuales del trabajador autónomo durante esos trimestres por todas las actividades económicas, empresariales o profesionales que desarrolle no alcancen la cuantía del salario mínimo interprofesional o la de la base por la que viniera cotizando si ésta fuera inferior. En estos casos no será necesario el cierre del establecimiento abierto al público o su transmisión a terceros.

Del mismo modo, ahora se considera situación legal de desempleo la de los trabajadores autónomos que no tengan trabajadores asalariados cuando se mantengan deudas exigibles con acreedores cuyo importe supere el 150 % de los ingresos ordinarios o ventas durante los dos trimestres fiscales previos a la solicitud y cuando estos ingresos o ventas supongan a su vez una reducción del 75 % respecto a los registrados en los mismos periodos del ejercicio o ejercicios anteriores. A tal efecto no se computarán las deudas que mantenga por incumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social o con la Administración tributaria. Se exigirá igualmente que los rendimientos netos mensuales del

trabajador autónomo durante esos trimestres por todas las actividades económicas o profesionales que desarrolle no alcancen la cuantía del salario mínimo interprofesional o la de la base por la que viniera cotizando si ésta fuera inferior. A tal efecto, no se computarán las deudas que mantenga por incumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social o con la Administración tributaria. En estos casos no será necesario el cierre del establecimiento abierto al público o su transmisión a terceros.

- Por lo que se refiere al artículo 331.1b de la Ley General de la Seguridad Social, se considera causa legal de cese la fuerza mayor, determinante del cese temporal o definitivo de la actividad económica o profesional. Se entenderá que existen motivos de fuerza mayor en el cese temporal parcial cuando la interrupción de la actividad de la empresa afecte a un sector o centro de trabajo, exista una declaración de emergencia adoptada por la autoridad pública competente y se produzca una caída de ingresos del 75 % de la actividad de la empresa con relación al mismo periodo del año anterior y los ingresos mensuales del trabajador autónomo no alcancen el salario mínimo interprofesional o el importe de la base por la que viniera cotizando si ésta fuera inferior.

Para acreditar estas dos situaciones —causas y fuerza mayor— se exige, de acuerdo con el artículo 332 de la Ley General de la Seguridad Social, una declaración jurada del solicitante en la que se consignen el motivo o motivos

concurrentes y la fecha de efectos del cese; se acompañará de los documentos que específicamente se establecen para cada situación, sin perjuicio de que el solicitante pueda aportar, si lo estima conveniente, cualquier medio de prueba admitido legalmente. Y, así, los motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos se acreditarán mediante los documentos contables, profesionales, fiscales, administrativos o judiciales que justifiquen la falta de viabilidad de la actividad. El trabajador autónomo podrá formular su solicitud aportando datos estimados de cierre al objeto de agilizar la instrucción del procedimiento e incorporará los definitivos con carácter previo al dictado de la resolución. Por su parte, la fuerza mayor determinante del cese definitivo o temporal total de la actividad económica o profesional se demostrará mediante documentación que acredite la existencia de aquélla y la imposibilidad de su ejercicio, ya sea de forma definitiva, ya sea temporal. Si el cese es definitivo, deberá aportar la solicitud de baja en el censo tributario de empresarios y la baja en el régimen especial de la Seguridad Social en el que estuviera encuadrado el solicitante. En el cese temporal total y parcial no procederá la baja en el régimen especial de la Seguridad Social.

Si se cumplen los requisitos, el trabajador deberá solicitar la prestación —según lo previsto en el artículo 337 de la Ley General de la Seguridad Social— a la mutua colaboradora con la Seguridad Social a la que se encuentre adherido o a la entidad gestora con la que tenga cubierta la protección dispensada por contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El derecho al percibo de la prestación

económica nacerá, con carácter general, el día siguiente a aquel en que tenga efectos la baja en el régimen especial al que estuvieran adscritos. También en términos generales, el reconocimiento de la situación legal de cese de actividad se podrá solicitar hasta el último día del mes siguiente al que se hubiere producido el cese de actividad. En caso de presentar la solicitud una vez transcurrido el plazo fijado, se descontarán del periodo de percepción los días que medien entre la fecha en que se debería haber presentado la solicitud y la fecha en que se presentó.

La duración se extenderá —ex artículo 338 de la Ley General de la Seguridad Social— en función de los periodos de cotización efectuados dentro de los cuarenta y ocho meses anteriores a la situación legal de cese de actividad, de los que al menos doce meses deben estar comprendidos en los veinticuatro meses inmediatamente anteriores a dicha situación de cese, con arreglo a la escala publicada en la ley. Por su parte, la cuantía, de acuerdo con el artículo 339, supondrá una base reguladora que será el promedio de las bases por las que se hubiere cotizado durante los doce meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese. La cuantía de la prestación, durante todo su periodo de disfrute, se determinará aplicando a la base reguladora el 70 % con carácter general.

A tenor del artículo 342.1 de la Ley General de la Seguridad Social, la percepción de la prestación económica por cese de actividad es incompatible con el trabajo por cuenta propia, aunque su realización no implique la inclusión obligatoria en el régimen especial de trabajadores

autónomos, así como con el trabajo por cuenta ajena, salvo indicación en contrario por esta misma norma o por cese temporal parcial de la actividad derivado de fuerza mayor, en cuyo caso las prestaciones serán compatibles con la actividad que cause el cese siempre que los rendimientos netos mensuales obtenidos durante la percepción de la prestación no sean superiores a la cuantía del salario mínimo interprofesional o al importe de la base por la que viniera cotizando si ésta fuera inferior.

En los supuestos en los que el trabajador autónomo se encuentre en situación de pluriactividad en el momento del hecho causante de la prestación por cese de actividad, la prestación por cese será compatible con la percepción de la remuneración por el trabajo por cuenta ajena que se venía desarrollando, siempre y cuando de la suma de la retribución mensual media de los últimos cuatro meses inmediatamente anteriores al nacimiento del derecho y la prestación por cese de actividad resulte una cantidad media mensual inferior al importe del salario mínimo interprofesional vigente en el momento del nacimiento del derecho.

b) *Prestación económica por nacimiento y cuidado de menor*

De acuerdo con el artículo 318 de la Ley General de la Seguridad Social, la prestación económica por nacimiento y cuidado de menor consistirá en un subsidio equivalente al 100 % de una base reguladora cuya cuantía diaria será el resultado de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas a este régimen especial durante los seis meses inmediatamente anteriores al mes previo

al del hecho causante entre ciento ochenta. De no haber permanecido en alta en el régimen especial durante la totalidad del referido periodo de seis meses, la base reguladora será el resultado de dividir las bases de cotización al régimen especial acreditadas en los seis meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante entre los días en que el trabajador haya estado en alta en dicho régimen dentro de ese periodo.

Los periodos durante los que el trabajador por cuenta propia tendrá derecho a percibir el subsidio por nacimiento y cuidado de menor serán coincidentes, en lo relativo tanto a su duración como a su distribución, con los periodos de descanso laboral establecidos para los trabajadores por cuenta ajena. Los trabajadores de este régimen especial podrán igualmente percibir el subsidio por nacimiento y cuidado de menor en régimen de jornada parcial en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente.

c) *Incapacidad temporal*

La cobertura de la contingencia por incapacidad temporal tendrá carácter obligatorio, salvo que se tenga cubierta dicha contingencia en razón de la actividad realizada en otro régimen de la Seguridad Social. En este supuesto, podrá acogerse voluntariamente a la cobertura de dicha contingencia, así como, en su caso, renunciar a ella en los términos establecidos reglamentariamente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 315 de la Ley General de la Seguridad Social.

3. Otras modificaciones de interés

La norma establece, además, una prestación para la sostenibilidad de la actividad

en sectores afectados por el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo regulado en el artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores tanto en su modalidad cíclica como sectorial. Modifica, entre otras normas, tanto el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social como el Reglamento General sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, a fin de actualizar su regulación respecto a los trabajadores por cuenta propia o autónomos. Crea, en el plazo de tres meses, un observatorio para el análisis y seguimiento de la prestación por cese de actividad por causas económicas de los trabajadores autónomos. Reconoce, a efectos de la previsión complementaria, que el trabajador autónomo pueda practicar la deducción por contribuciones empresariales a sistemas de previsión social empresarial en los términos previstos en la normativa fiscal de aplicación y recoge una excepción prevista para los trabajadores autónomos en situación de alta a 31 de diciembre del 2022, los cuales podrán aplicar, en su caso, distinta base mínima de cotización durante dos años.

Procede destacar, por último, el establecimiento de una serie de bonificaciones en las cuotas (en favor de familiares en la explotación agraria; para los trabajadores autónomos durante el descanso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural; por cuidado de menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave o, entre otros, para trabajadoras autónomas que se reincorporen al trabajo en determinados supuestos). Mención especial merece, en esta línea, la reducción de cuotas por inicio de una actividad por cuenta propia. Con carácter general, se aplicará una cuota reducida por contingencias comunes y profesionales, en

cuantía establecida por los Presupuestos Generales del Estado y durante los doce meses naturales completos siguientes al alta,

quedando los trabajadores exentos de cotizar por cese de actividad y por formación profesional.